

Santiago, veintitrés de diciembre de dos mil veinticuatro.

**VISTOS:**

Ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, bajo el Rol Interno del Tribunal N°440-2024, RUC N°2.200.782.639-0, se llevó a efecto el juicio oral respecto del acusado Danilo Jesse Cortés Solano y otros, quien resultó condenado como autor de un delito de homicidio calificado de Raúl Enrique Julio Contreras, en grado de ejecución consumado, aplicándosele una pena quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo, más las accesorias legales del caso.

En dichos antecedentes, la defensa del sentenciado dedujo un recurso de nulidad, el que se conoció en la audiencia pública de fecha tres de diciembre último, convocándose a los intervinientes a la lectura de la sentencia para el día de hoy, tal como consta del acta respectiva.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, a propósito del examen del recurso presentado, necesario resulta detallar los hechos que se encuentran asentados en el fallo de instancia y que están fijados en el motivo duodécimo.

Al efecto, los jueces del tribunal oral establecieron la concurrencia de lo siguientes hechos:

*“El día 11 de agosto de 2022, en horas de la mañana, cercano a las 09:00 horas, los acusados Gabriela Ximena Pérez Sazo, Aurora María Lara Rivera, Gloria Soledad Nina Silva, Thiare Charlot López Silva, Eugenio Antonio Herrera Julio, Yessenia Andrea Herrera Pérez, además de un sujeto no individualizado, llegaron hasta el domicilio de la víctima RAUL ENRIQUE JULIO CONTRERAS,*



*ubicado en calle Monjitas N° 945 de esta ciudad, previamente concertados para agredirlo, ofuscados y con el deseo de recuperar ciertas especies, por cuanto lo sindicaban como el responsable de un robo perpetrado con antelación de unas pertenencias de un familiar de la mayoría de los encausados y, una vez en el lugar, parte de aquellos ingresaron al inmueble de la víctima y por la fuerza lo sacaron al exterior, donde todos estos y otros, de manera concertada, lo agredieron con el fin de lesionarlo gravemente mediante golpes de puños y pies en distintas partes del cuerpo de la víctima, pisando su cabeza, sus extremidades, apretando partes de su cuerpo con un alicate, contexto en el cual intervino el acusado Danilo Jesse Cortés Solano, quien aprovechando que la víctima se encontraba reducida en el suelo, lesionada, indefensa, sobre seguro y sin posibilidad alguna de repeler el ataque de que era objeto, procedió a tomar un tubo de escobillón metálico, partirlo en dos partes e intentar introducirse por el ano, lo que no logró, para posteriormente y para quitarle la vida deliberadamente le enterró dicho objeto en su pierna derecha con tanta presión que le causó una lesión de 30 milímetros de diámetro y de una profundidad de 3,5 a 5 centímetros, con pérdida de tejido muscular y vascular.*

*A pesar de la lesión causada los acusados mantuvieron la agresión en contra de la víctima, incluso una de ellas procedió a arrastrarlo hasta el lugar donde en definitiva falleció por hipovolemia aguda con ocasión de herida contuso-punzante de pierna derecha, con lesión vascular.*

*La víctima con ocasión del ataque de que fue objeto resultó además con las siguientes lesiones: herida contuso punzante en pierna derecha, escoriación en cara interna de la misma pierna, equimosis frontal derecha, equimosis y*



*escoriación frontal media, equimosis frontal izquierda, equimosis superciliar lateral izquierda, equimosis superciliar inferior izquierda, equimosis en mejilla izquierda, equimosis en región retroauricular izquierda, equimosis en región preauricular izquierda, fractura de tabique nasal y equimosis en región nasal, equimosis y erosión en región malar derecha, equimosis en cuello, equimosis en dorso, en región escapular y lumbar derecha, equimosis en brazo derecho, escoriación en dorso de mano y en dedo anular, y escoriación en rodilla, en pierna y tobillo.”*

En cuanto a la calificación jurídica, el fallo los considera como un delito de homicidio calificado, previsto en el artículo 391 N°1, circunstancia primera del Código Penal, cabiéndole al enjuiciado una participación en calidad de autor del artículo 15 N°1 del mismo cuerpo legal.

**SEGUNDO:** Que, por parte de la defensa del condenando, se dedujo un recurso de nulidad, en donde, como **causal principal** se plantea aquella prevista en la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal.

Para fundar el recurso, la defensa sostiene que, en esta causa, el Ministerio Público dirigió una investigación respecto de la participación de varias inculpados en un hecho en el que falleció una persona, siendo condenado, como autor del delito de homicidio calificado, solamente el inculpado Cortes Solano, en tanto, los otros acusados fueron sancionados como autores del delito de lesiones graves.

En este sentido, considera que ha existido una errónea aplicación del derecho por parte de la judicatura de instancia ya que ella impuso una condena correspondiente al delito consumado de homicidio calificado, entendiendo que se cumple con el dolo homicida en la dinámica de los hechos acreditados por el Tribunal, siendo que, en los mismos, no se encontraba probado el ánimo de matar



sino sólo el de lesionar o mutilar una parte del cuerpo, de allí que repasa los elementos incriminatorios aportados en el juicio oral, de los cuales, como insiste, no alcanzan para determinar el *animus necandi* que se exige en la figura delictual respectiva, lo mismo que la configuración de la calificante pues, al sentenciado, se le atribuye un actuar alevoso, en donde se habría aprovechado de la nula resistencia que habría tenido la víctima, y por esta razón procedió a establecer el tipo penal como homicidio calificado, en virtud de la norma del artículo 391 N°1 del Código Penal, lo que descarta en este caso y que, en su concepto, también viene asociado a la errada aplicación del derecho al entender configurado la intención homicida que, en este caso, no fue acreditado, estando allí las diversas posiciones emanadas de tribunales superiores de justicia, que constatan doctrinas distintas y opuestas al fallo impugnado.

En este orden de cosas, solicita anular la sentencia, dictándose sin nueva audiencia, pero separadamente, una sentencia definitiva de reemplazo en conformidad con el artículo 385 del Código Procesal Penal, la cual declare que se condena al imputado Cortes Solano, como autor del delito de Lesiones Graves consagrado en el artículo 397 N° 2 del Código Penal, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, o de forma subsidiaria si el tribunal estima que existió dolo homicida por parte del imputado condenado, se le condene como autor del delito de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal, por no concurrir la calificante de alevosía considerada por parte del tribunal.

**TERCERO:** Que, este caso, conviene efectuar algunos alcances respecto del recurso formulado.



Lo primero, de forma excepcional, le corresponde a la Corte Suprema conocer el recurso de nulidad que se ha fundado en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, siendo una regla de excepción la que se establece el inciso tercero del artículo 376 del mismo cuerpo legal, en cuanto se entrega a este Tribunal el conocimiento de dicha causal de nulidad, siendo necesario que se invoquen distintas interpretaciones sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores sobre la cuestión de derecho planteada en el recurso.

En este caso, para cumplir con esta última exigencia, el recurrente precisa la indicación de procesos que no alcanza para entender satisfecha esta exigencia. Prueba de ello es que señala una causa que se pronuncia sobre un recurso de casación, el que no corresponde al actual proceso penal. Luego, menciona otra causa que se relaciona con un recurso de apelación, el que también corresponde a otro sistema de juzgamiento del actual y, las que están vinculadas al actual sistema, son fallos que no permiten determinar que existan diversas interpretaciones sobre la materia pues se trata de situaciones jurídicas distintas en que, el reproche, viene dado por la falta de acreditación del elemento volitivo, de lo cual no existe una posición disímil ya que, al igual que los otros elementos, es necesaria su acreditación, lo que es distinto del postulado de la defensa, el que no precisa con claridad cuáles serían las interpretaciones disímiles que se enfrentan y cuya dispersión jurisprudencial pretende remediar, sino que tan sólo entrega argumentos asociados a uno de los elementos considerados por los sentenciadores de instancia para subsumir la conducta, lo que se opone a la estructura formal y estricta de un arbitrio de nulidad.



**CUARTO:** Que, inclusive, pasando por alto lo explicado, el recurso formulado no puede prosperar.

En efecto, los cuestionamientos que se plantean dicen relación con la valoración que se entrega a los medios probatorios, en particular respecto del elemento volitivo del tipo penal, en donde la sentencia se extiende en su considerando décimo, cuando se refiere a la culpabilidad. En este caso, para su determinación, el fallo recurre a la forma y entidad de la lesión causada, en donde se vislumbra el ánimo homicida con que obró el hechor pues, como enfatizan los sentenciadores, el inculpado, primero, intentó golpear en la cara a la víctima con un bloque de concreto y luego, se hizo de un tubo de escobillón, el cual partió, precisamente, con el objeto de poder enterrarlo en una de las extremidades de la víctima, el cual luego giró con la clara finalidad de provocar una herida más gravosa que generó un sangrado profuso, lo que finalmente causó la muerte de la víctima.

En este caso, es claro como el dolo homicida se representa en el actuar del encartado. Ello se refleja no sólo en la manera en cómo ataca a su víctima -lo que fue indicado- sino que ello dimana de su actitud posterior pues, pese a la gravedad de las lesiones provocadas, el sentenciado decide huir del lugar y procura hacerse de un velo de impunidad al pretender que los coparticipes eliminen los vestigios del arma usada o bien omitan alusiones a su actuar en sus declaraciones, lo que permite concluir que el elemento subjetivo se encuentra acreditado y los reproches, en realidad, conforman una disconformidad con la valoración efectuada de manera soberana por los sentenciadores, en que, por cierto, no se advierte el



error de derecho que se denuncia, de tal manera que el recurso será desatendido en este capítulo.

**QUINTO:** Que, en subsidio, la defensa plantea una segunda causal de invalidación, la cual está prevista en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, cuando en la sentencia, se hubiere omitido algunos de los requisitos previstos en los artículos 342, letras c), d) o e) del Código Procesal Penal.

En su desarrollo, atribuye a la sentencia una infracción palmaria del principio de la razón suficiente, dado que las conclusiones obtenidas a partir de la prueba incorporada al juicio no son unívocas, asegurando que de la prueba rendida pueden derivarse otras hipótesis distintas de la que se arribó por el tribunal a quo.

Explica que, con la prueba rendida en juicio, se dio por acreditada la existencia de una dinámica en la cual los hechos se fueron desarrollando hasta llegar a una etapa cúlmine, la que termina con la muerte de la víctima. En este sentido, señala que las conclusiones se sustentan de manera errada y con infracción del aludido principio de la razón suficiente ya que, según explica, no hay una única razón para pensar que el condenado Cortés Solano haya actuado con un ánimo de matar en contra del ofendido, lo cual se agrava con que, en este caso, los sentenciadores optaron por condenar por lesiones graves al resto de los inculpados, dado que, como se señaló e ilustró mediante declaraciones, algunos de los atacantes ejecutaron conductas muy similares a las del sentenciado, como golpear en la cabeza con un bloque de cemento, e incluso intentar ahorcar al occiso con un cable de teléfono, conductas que por sí consideradas aisladas objetivamente constituyen intención homicida.



Señala que la conclusión del tribunal no tiene un sustento sólido apreciando las conductas del resto de los acusados y la del propio encartado, razón por la cual se vulnera dicho principio, ya que el ánimo homicida no aparece suficientemente claro al analizar las probanzas del juicio. Así, entiende que no hay una razón suficiente para pensar que la muerte se produjo exclusivamente por el actuar del señor Cortés Solano, dado que existen razones más que fundadas que controvierten lo concluido por el tribunal, siendo relevante la demora en la atención médica, lo que fue sustentado en las declaraciones de los propios peritos, y por el carácter de la misma herida, que potencialmente no es una herida que provoque la muerte instantánea, ya que los mismos legistas se encuentran contestes en que existe una posibilidad importante de sobrevida, si la herida es tratada de forma oportuna.

Así las cosas, pide acoger el recurso, anular la sentencia, dictándose -sin nueva audiencia, pero separadamente- una sentencia definitiva de reemplazo en conformidad al artículo 385 del Código Procesal Penal, la cual declare que se condena al imputado de autos, como autor del delito de lesiones graves, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, o de forma subsidiaria, se le condene como autor del delito de homicidio simple.

**SEXTO:** Que, bien cabe recordar que, en materia procesal penal, el inciso 1° del artículo 297 del Código Procesal Penal, entrega una libertad de ponderación a los tribunales, estableciendo como límites los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Ahora bien, sobre los primeros, la defensa entiende vulnerado el principio de la razón suficiente, el cual es conocido como aquel que entiende que una premisa es





suficiente cuando se basta por sí sola para servir de apoyo completo a lo enunciado, cuando no hace falta nada más para que el juicio sea plenamente verdadero. Así, este principio se asocia al deber de fundamentación de las resoluciones judiciales – artículo 36 de Código Procesal Penal –, siendo del caso señalar que, tal como ha tenido ocasión de explicar esta Corte, en virtud de la regla de la razón suficiente, *“cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho debe estar fundamentada en una razón que la acredite suficientemente”* (SSCS Rol N° 21.304-14 de 5 de mayo 2015 y Rol N° 26.854-14 de 15 de septiembre de 2016), precisando en otra oportunidad que *“para postular con éxito la vulneración de esta regla, necesariamente se requiere que el impugnante identifique el hecho cuya existencia ha tenido por demostrado la sentencia -presencia del acusado en el lugar de los hechos, por ejemplo- y que genera la disconformidad de su parte y, luego, que puntualice las afirmaciones o proposiciones con que la sentencia tuvo por probado dicho hecho -por ejemplo, reconocimiento del acusado por un testigo presencial o que el apodo entregado por la testigo del autor corresponde al del acusado- y que no se hayan fundamentadas en una razón que las acredite suficientemente -por ejemplo, que el testigo presencial reconoció a un tercero y no al acusado, o que el apodo del autor aportado por el testigo corresponde a un tercero y no al acusado-, de manera de evidenciar que el hecho dado por acreditado no es compatible con una estructura racional del pensamiento donde el denominado ‘consecuente’ debe hallarse necesaria y estrechamente vinculado con el ‘antecedente’. Tales exigencias resultan insoslayables e inexcusables, pues de lo contrario, una crítica genérica a la fundamentación y razonamientos del fallo por alejarse en su*



*desarrollo de la ley de la lógica formal de la razón suficiente pasaría por alto que, conforme prescribe el artículo 297 del Código Procesal Penal, los tribunales aprecian la prueba “con libertad”, constituyendo los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, sólo acotados límites al ejercicio de dicha libertad, razón por la que el arbitrio que plantee que dichas fronteras fueron sobrepasadas o desatendidas por los jueces de la instancia deberá puntualizar cómo tal vicio o defecto se concretó en la exposición de la valoración de determinados medios probatorios que sirvieron para fundar determinados hechos y circunstancias en que se sostuvo la decisión condenatoria. En otras palabras, no basta, como lo parece creer el recurso, con afirmar que la valoración del material probatorio que realiza la sentencia contradice la regla de la razón suficiente, pues de aceptarse, importaría una revisión general y total de lo discernido por los recurridos en tal labor de valoración, transformando este arbitrio estricto y excepcional de nulidad, en un recurso de apelación, y a esta Corte en un tribunal de segunda instancia” (SCS Rol N° 12.882-15 de 8 de octubre de 2015).*

En este sentido, atento a lo señalado por la recurrente, la defensa cuestiona el razonamiento del tribunal en el que, por el mismo hecho, a los otros encausados se los condena como autores del delito de lesiones, en tanto, a su mandante se le castiga como ejecutor del delito de homicidio calificado, lo cual está explicado en el considerando décimo del fallo, en dónde resaltan los motivos que sustentan esa decisión. En efecto, en ese raciocinio se evidencia un ejercicio lógico que determina la diferencia relacionada con la decisión de condena sobre la conducta de Cortés Solano, quien actuó con un ánimo distinto del que gobernó las acciones



de los restantes encausados, quienes propinaron golpes a la víctima pero, ninguno de ellos, de la gravedad ni con la intención que mantuvo aquel sentenciado. Es decir, se trató de acciones distintas, las que fueron juzgadas de forma acertada, encontrándose ello sustentado en la prueba de cargo descrita, lo que permite descartar el vicio descrito y, al igual que en el caso anterior, la protesta solo se basa en una disconformidad con la conclusión adoptada, pretendiendo que esta Corte se erija como una nueva instancia de revisión de las probanzas rendidas, lo que no es propio del recurso de nulidad presentado, debiendo así descartar de forma íntegra el recurso en estudio.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 373, 374 y 384 del Código Procesal Penal, se **RECHAZA** el recurso de nulidad deducido por la defensa del sentenciado, Danilo Jesse Cortés Solano, el cual se presenta contra la sentencia de fecha dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro y el juicio oral que le precedió, en los antecedentes N°440-2024, RUC N° 2.200.782.639-0 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, los que, en consecuencia, no son nulos.

**Regístrese y devuélvase.**

**Redacción a cargo de la Ministra señora Gajardo.**

**Rol N°56.018-2024**

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R. y Leopoldo Llanos S., las Ministras Sras. María Teresa Letelier R. y María Cristina Gajardo H. y el Abogado Integrante Sr. Carlos Urquieta S. no firma el Ministro Sr. Valderrama, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar con feriado legal.





En Santiago, a veintitrés de diciembre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

